

América Latina y el Caribe

Autores:

MSc. Claudia Marín (coordinadora)

Lic. Lourdes M. Regueiro

MSc. Pável Alemán

MSc. Santiago Espinosa

MSc. Elio Perera

MSc. Orietta Hernández

MSc. Juan A. Cordero

Lic. Diana Legrá

Lic. Mayra Bárzaga

Colaborador:

Lic. José Francisco Piedra Rencurrell



Escenario más probable

Evolución económica regional e impacto de los precios de las materias primas

El desempeño económico de la región está condicionado, entre otros, por los siguientes factores:

- precios de materias primas, alimentos y combustibles.
- tasas de interés de referencia internacional.
- evolución de los flujos financieros.
- dinamismo económico de los principales socios.
- políticas económicas domésticas.
- vulnerabilidad sanitaria.
- impacto de la guerra que se libra en territorio de Ucrania.
- impacto económico del riesgo geopolítico de otros conflictos.
- impacto económico de eventos climatológicos asociados o no al cambio climático.
- política de sanciones y medidas coercitivas de Estados Unidos y otros gobiernos de Occidente sobre países de la región y sus socios económicos.

Los productores y exportadores de hidrocarburos —México, Venezuela, Colombia, Brasil y Guyana, Ecuador, Perú, Argentina y Trinidad y Tobago— se benefician del incre-

mento de los precios de esos productos. Sin embargo, la situación no favorece a los importadores, como la mayoría de las islas del Caribe, Centroamérica y en menor medida algunos Estados sudamericanos.

Los planes de modificación de la matriz energética global inciden en el incremento del precio del litio, el cobalto, el níquel y el cobre, lo que beneficia a países con importantes reservas de estos minerales, cuyas economías se asientan en el extractivismo. Es el caso de México, Cuba, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Algunos de los Estados con mayores reservas de litio se plantean conformar una alianza tecnológica para su progresiva industrialización que no implica la exclusión del capital transnacional.

El alza de los precios de los alimentos afecta notablemente a los países importadores, mientras para los grandes productores de alimentos (Argentina y Brasil) hace muy lucrativa la actividad agroexportadora, en particular de trigo, maíz y soja. Sin embargo, los beneficios asociados a este comportamiento de los precios pueden verse restringidos por la interrupción de los suministros provenientes de Rusia, Ucrania y Belarús. Pocos países, como pudiera ser el caso de Brasil, logran desarrollar políticas para sustituir la importación de fertilizantes. Los efectos positivos para los exportadores se ven amortiguados por el incremento de los precios de otros alimentos, de manera que el balance dependerá del diferencial volumen-precio y el propio saldo comercial.

Estas dinámicas incrementan las presiones inflacionarias preexistentes, con el consecuente deterioro del poder adquisitivo, acrecentando la conflictividad social y el

desgaste de los gobiernos. Así, la duración del conflicto en Ucrania deviene factor a tener en cuenta.

La guerra en Ucrania demanda recursos de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que limita aún más el ya mermado financiamiento para la región. A ello se suma el control republicano del legislativo estadounidense que obstaculiza su aprobación. Crecen los condicionamientos políticos para el acceso a financiamiento.

Impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe y desafíos de la recuperación. Oportunidades para la cooperación cubana

En la situación sanitaria de la región se superponen: el desigual control de la pandemia y sus efectos colaterales (por territorios y grupos sociales), la aparición de nuevas enfermedades transmisibles y las dificultades para el tratamiento de las no transmisibles agudizadas durante la pandemia. Se acentúan las brechas sociales asociadas a las inequidades en el acceso a los servicios públicos, el mercado laboral y las tecnologías digitales. Las mujeres y los trabajadores informales son los grupos sociales más afectados. El efecto cruzado de las secuelas de la pandemia y el agravamiento de la situación económica y social en términos de inflación, ingresos, calidad del empleo y desigualdad, genera tensiones y acelera el desgaste de los gobiernos, con independencia de su signo político.

Los resultados positivos en el control de la pandemia con la utilización de vacunas propias propician una mayor demanda de la cooperación cubana en materia sanitaria.

ria, incluyendo la proveniente de instancias subnacionales de gobierno. La diferenciación del producto vacunal cubano por la posibilidad de su uso pediátrico incentiva las solicitudes de registro para su utilización en otros países y para la producción conjunta.

El acceso al mercado biofarmacéutico y el registro de patentes latinoamericanas y caribeñas en el exterior enfrenta obstáculos de diferente naturaleza mediados por razones políticas. El desarrollo de protocolos de intervención médica para diferentes enfermedades y la asesoría científica es una oportunidad para su aplicación, constituyen oportunidades para la cooperación e inserción internacional de Cuba, cuya materialización demanda financiamiento internacional. Los convenios bilaterales de cooperación existentes estimulan a otros países a contratar los servicios cubanos. Los riesgos asociados a la presencia del crimen transnacional en países receptores generan nuevas situaciones de tensión a la cooperación cubana, a lo que se suma la tendencia al incremento de los flujos migratorios hacia países de la región.

México y Argentina son dos potenciales socios para la producción conjunta de vacunas, que podrían contribuir a ampliar los límites de la capacidad productiva doméstica. La recurrencia de brotes pandémicos y las enfermedades no transmisibles para las que Cuba desarrolla medicamentos mantiene la demanda de productos farmacéuticos cubanos en la región.

Balance de la correlación de fuerzas políticas en la región

En la región prevalece una nueva correlación de fuerzas donde llega al gobierno una

izquierda heterogénea, y con menor capacidad de transformación dadas sus convicciones políticas moderadas por el posibilismo y las alianzas con sectores de centro y de derecha moderada. El establecimiento de programas mínimos de reforma, le permite recuperar y ganar nuevos espacios en contextos domésticos muy polarizados, sin contar en su mayoría con el respaldo de los poderes legislativo y judicial.

Estos gobiernos se enfrentan a una derecha de amplio espectro muy activa en espacios públicos —incluidas las redes sociales— y con articulación internacional y mediática de su vertiente más conservadora, incluidos sectores de la iglesia evangélica y fundaciones y redes liberales de derecha. El nivel de polarización política se evidencia en la presencia política de una derecha ultraconservadora concomitante con tendencias totalitarias y filofascistas.

El gobierno peruano encuentra límites tanto en la solidez de su proyecto político como en la falta de una mayoría legislativa calificada, la camisa de fuerza de la legislación vigente y una gobernabilidad frágil. Los sucesivos procesos de vacancia moral impulsados por la oposición identificada con el fujimorismo, eliminaron la radicalidad inicial expresada en el programa y discurso políticos del presidente Castillo. Se valora la posibilidad de interrupción de su mandato.

En Chile, el gobierno transforma parte de la institucionalidad, devolviendo al Estado la responsabilidad de garantizar la seguridad social y ampliando las garantías materiales para el ejercicio de los derechos en salud e instrucción. Se produce una reforma parcial del cuerpo de Carabineros, estableciendo límites a su actuación. El desempeño cauteloso y las ambigüedades del gobierno

de Gabriel Boric, tanto en su política doméstica como exterior, genera un permanente estado de inconformidad que se expresa en la protesta social, y reduce el reconocimiento social a su gestión.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro reinstala la mesa de negociación con el ELN, avanza gradualmente en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz alcanzado en La Habana con las FARC-EP, y desarrolla otros procesos de negociación con actores armados, en especial con los que se retiraron o no firmaron el Acuerdo Final con la FARC-EP y los paramilitares. Los sectores más conservadores de la sociedad colombiana utilizan el paramilitarismo para oponer resistencia y generar inestabilidad. Se impulsa una agenda de la Jurisdicción Especial para la Paz que permite su aplicación para otros actores del conflicto, y modalidades diferenciadas de sanción de los delitos y reparación de las víctimas del conflicto. El gobierno conduce una reforma agraria que apunta a desmontar uno de los ejes de décadas de conflicto armado.

El nuevo gobierno colombiano apoya el restablecimiento de la CELAC como espacio de diálogo político y concertación regional, y avanza en la construcción de la nueva institucionalidad para la integración regional sudamericana. Mantiene una estrecha relación con Estados Unidos, pero revisa la agenda bilateral de seguridad. Se establece un control fronterizo más eficaz con Venezuela, que incluye la cooperación en ciertos temas de seguridad y comercio, y se reducen los niveles de conflicto entre ambos países.

Bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula Da Silva, en Brasil se reconstruye de forma parcial el Estado de Derecho previo a los go-

biernos de Michel Temer y Jair Bolsonaro. Una alianza política amplia, muy diversa en lo ideológico y pragmáticamente flexible, permite consensos mínimos en el legislativo, condicionados a la negociación política con las otras fuerzas, lo que atenúa cualquier posible radicalidad. Ello incluye el apoyo de sectores interesados en la recuperación del protagonismo internacional y multilateral de Brasil. No obstante, amplios sectores de ultraderecha liderados por Bolsonaro preservan su influencia en la polarizada sociedad brasileira y disputan el poder desde diferentes ámbitos de gobierno.

En Argentina, el escenario electoral se debate entre una recomposición del Frente de Todos que permita superar la fragmentación interna —incluido el ascenso de otras corrientes dentro del peronismo, en particular la asociada a Sergio Massa—, y un retorno de Juntos por el Cambio al gobierno nacional con predominio de su vertiente más conservadora. En la definición del resultado electoral juegan un papel importante la percepción popular sobre las medidas para controlar la inflación, las alianzas internas en los niveles provincial y local, y el impacto de una eventual victoria de Lula en Brasil.

El gobierno de Morena en México se reelige bajo un nuevo liderazgo, que continúa desarrollando su activismo regional, en particular en temas poco conflictuales y en el ámbito de la CELAC, al tiempo que consolida vínculos más fluidos con Estados Unidos.

En Honduras, la alianza de Libre con otras fuerzas políticas permite modificar la Constitución Política del país y otros cambios en el sistema jurídico-normativo orientados a la modernización institucional del Estado. Sin embargo, las alianzas internas en pos de

la gobernabilidad y las restricciones económicas imponen límites que llevan a moderar las prioridades iniciales del gobierno de Xiomara Castro. Las transformaciones se llevan a cabo preservando la relación con Estados Unidos.

En El Salvador, Nayib Bukele preserva el control de los poderes del Estado y se mantienen las tensiones con Estados Unidos. Continúa desarrollando las relaciones con China y otros actores extrarregionales que ofrezcan financiamiento y cooperación.

En Bolivia, el gobierno de Luis Arce Catacora, logra sostener el crecimiento económico bajo la presión de una derecha fragmentada y sectores asociados. Se mantienen conflictos entre algunas corrientes al interior del Movimiento al Socialismo, así como con algunos miembros del gabinete. Sin embargo, el MAS-IPSP mantiene un acompañamiento crítico a la gestión de Luis Arce y juntos logran sortear diversos intentos desestabilizadores de la derecha, concentrada principalmente en la región de Santa Cruz.

En Ecuador, la profundización de la crisis estructural y multidimensional provoca el rechazo social y crecientes acciones de movilización popular, que son respondidas con mayor violencia estatal y pone en peligro la conclusión del mandato constitucional del gobierno. El Movimiento Revolución Ciudadana no logra articular el movimiento desde las bases, ante la ausencia de un liderazgo dentro del país y una estrategia que dé respuesta a los intereses de un campo popular no cohesionado ni orgánica ni ideológicamente. No se descartan alianzas electorales con partidos tradicionales de derecha contendientes del partido de gobierno. Los partidos de la “izquierda tradicional” y

los movimientos indígenas y sociales, más allá de la protesta, no logran construir un proyecto de lucha coherente.

Sin resolver problemas estructurales, la economía venezolana muestra señales graduales de alivio de la tensión económica de los últimos años, asociadas en lo fundamental al incremento del precio de los hidrocarburos; la recuperación gradual de la producción de crudo; la implementación de un sistema monetario dual; la flexibilización de la política económica, en especial de las condiciones para la inversión extranjera; y las expectativas de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos que aligere el impacto de las sanciones. Ello no implica la anulación de tensiones internas, en especial vinculadas a la brecha entre el salario y el nivel de precios.

Un potencial restablecimiento de las relaciones económicas en el sector energético entre Estados Unidos y Venezuela, influye en el crecimiento de las inversiones necesarias para la plena reactivación de la capacidad productiva de los campos petroleros venezolanos y de la capacidad de refinación y petroquímica de PDVSA. Sin embargo, a corto plazo ello representa un desafío para aquellos países que han sido beneficiarios de los acuerdos de suministro de petróleo en el marco de Petrocaribe.

El gobierno venezolano mantiene el poder político, con mayoría en la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías, y el apoyo de las Fuerzas Armadas —un actor clave para la continuidad del proceso y en el enfrentamiento a la pandemia y las misiones sociales. La composición del Consejo Nacional Electoral y la sustitución de varios ejecutivos de PDVSA, abre espacio a un cambio de matiz en la agresividad de Estados Unidos y la

Unión Europea. El restablecimiento del diálogo con la oposición permite al gobierno ganar adeptos tanto en los sectores populares como en la clase media y media alta. Lo anterior, unido a los gestos de Estados Unidos y la Unión Europea y la relación con Rusia, Irán y China, configura una correlación de fuerzas favorable al gobierno.

Caribe

El bipartidismo, la orientación al centro, la alternancia y el pragmatismo son factores de estabilidad política en el Caribe. Gana fuerza la idea del republicanismo (en especial en Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas y Belice) sin que ello derive en cambios sustantivos en los sistemas políticos, más allá del simbolismo de eliminar una estructura asociada al pasado colonial. El poder político sigue recayendo en el primer ministro.

Al impacto económico de la pandemia por la reducción de la actividad turística se suman las dificultades en el acceso y el incremento de los precios de alimentos y energía. La dinámica económica caribeña continúa determinada por: la condición de pequeños estados insulares en desarrollo; la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático; la dependencia de la importación de energía y alimentos en la mayoría de los países; las regulaciones para la reducción del riesgo bancario; el elevado endeudamiento y el reducido espacio fiscal derivado de los programas de ajuste macroeconómico; y la dificultad para acceder a los mercados internacionales de capital y a fondos concesionarios y de financiamiento para el cambio climático. Estos temas conforman la agenda multilateral consensuada

de CARICOM y se mantiene como reclamo sistemático el reconocimiento de la excepcionalidad caribeña. Esta discusión resuena en el marco de la OEA, donde los gobiernos caribeños demandan un mayor énfasis a la dimensión del desarrollo integral en relación con la de gobernabilidad democrática.

En el marco de CARICOM, sin embargo, se observan factores que pueden quebrar sus proyecciones consensuadas asociados a:

- **Al interior del bloque:** las frecuentes posiciones disruptivas de Jamaica, en ocasiones dirigidas contra otro miembro, que obliga a los restantes a tomar partido.
- **Con América Latina:** relación con Venezuela (impacto de la migración venezolana, diferenciando en torno al Esequibo, relación con Trinidad y Tobago y eventual presencia militar rusa en Venezuela), y las posiciones respecto al gobierno de Nicaragua. La percepción caribeña de cómo la región incorpora el tema del cambio climático, y el tratamiento diferenciado a los pequeños estados insulares en su agenda, puede tener impacto en la importancia que los caribeños otorguen a la CELAC. En ese sentido, la incorporación de estos temas en la agenda de CELAC es un signo positivo.
- **Con el mundo:** las posiciones y respuestas regionales frente al uso de la opción militar por parte de Rusia en Ucrania, en especial la posibilidad de aplicación de sanciones, de suspensión del Programa de Ciudadanía por Inversión y el registro de yates rusos en las costas caribeñas.

En todos los niveles está la labor y presiones de Estados Unidos para dividir la

CARICOM, para que más países asuman posiciones favorables a sus intereses y para debilitar el intercambio con América Latina y con Cuba. En su relación con el Caribe, Estados Unidos prioriza los temas de seguridad, cambio climático y transición energética ante la percepción de la competencia china en el Caribe. Sin embargo, su compromiso es percibido con suspicacia en una subregión que reclama acciones concretas y asignación de recursos en los temas de su interés, y acepta la cooperación china tanto por las ventajas económicas como por el interés de captar la atención de sus competidores.

La inestabilidad político-institucional, las fluctuaciones del crecimiento económico, la miseria, la inseguridad, el injerencismo, la vulnerabilidad ante eventos climatológicos extremos y la insalubridad, mantienen al Estado haitiano en un complejo proceso crisis multidimensional donde predominan la ingobernabilidad, la corrupción, el fraude, la violencia y la criminalidad. Los líderes caribeños solicitan a la comunidad internacional la actuación en la búsqueda de una solución consensuada, basada en el diálogo político.

No se perfila al interior del país un liderazgo sólido, con capacidad para revertir la crisis. Las bandas criminales mantienen el control territorial y se aprecia un distanciamiento respecto de los actores que las colocaron como mecanismo de represión. La presencia de actores extrarregionales en Haití a través de ayuda humanitaria, económica, militar, etc. obedece a las estrategias geopolíticas de las grandes potencias para legitimar su poder e intereses en el área, siendo Estados Unidos la de mayor influencia. No se descarta la intervención interna-

cional ante una profundización de la crisis. Esta situación provoca un incremento de la migración haitiana, que demanda recursos materiales y organizativos por parte de los receptores, incluida Cuba.

Política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe

La presencia de actores extrarregionales adversarios estratégicos de Estados Unidos (China, Rusia e Irán) transversaliza su política hacia la región con independencia del partido en el gobierno. No explicita una política integral hacia la región a pesar del carácter estratégico que ella comporta en un momento de declive hegemónico relativo. El foco de atención de las políticas declaradas se concentra en México, Centroamérica —en especial en el Triángulo Norte— y el Caribe. La migración, la violencia y la corrupción son los temas prioritarios de la agenda. La corrupción es identificada como causa de la pobreza y los flujos migratorios.

Un eventual retorno de una administración republicana provoca tensiones con no pocos gobiernos de la región, en especial con los que favorecen la tendencia globalista, e introduce cambios en la retórica y la forma de afrontar los crecientes flujos migratorios hacia posiciones de mayor agresividad, pero no altera sustancialmente las prioridades mencionadas. La relación con el Caribe se vería nuevamente deteriorada. Al mismo tiempo, un gobierno estadounidense en la órbita del trumpismo implicaría un impulso a las fuerzas neoconservadoras en la región, aun si no están al frente de los ejecutivos.

El uso de sanciones es un elemento de continuidad, pero se busca una mayor efectividad sumando a los aliados a adoptarlas. Las sanciones nominales dirigidas a funcionarios públicos refuerzan la política de cambio de régimen contra Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Se consolida una percepción de desconfianza en torno al compromiso de Estados Unidos con la región. Los gobiernos locales que no confían en recibir los beneficios de la cooperación estadounidense negocian con actores extrarregionales. Como tendencia se privilegian el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil como receptores y distribuidores del financiamiento en detrimento del sector estatal.

Estados Unidos insiste en reconstruir la deteriorada imagen de la OEA a través de reformas en ese organismo —que incluso pudieran poner en debate alguno de sus documentos básicos, de cambiar las figuras que lideran la OEA, el BID y la Cumbre de las Américas. Las acciones fallidas y decisiones unilaterales de Estados Unidos y la ausencia de compromisos concretos de aportes al financiamiento al desarrollo, lastran la capacidad de la Cumbre de las Américas como espacio de intercambio y construcción de confianza.

El BID se presenta como promotor de la integración regional y articulador en la captación de recursos internacionales para la recuperación. El nuevo énfasis en la integración podría indicar una actualización de viejas propuestas o el lanzamiento de nuevas iniciativas localizadas en áreas geográficas estratégicas donde pocos recursos tengan un alto impacto en el desarrollo de infraestructura y tecnología. Esas iniciativas son capitalizadas políticamente en la narrativa estadounidense como resultado de asocia-

ciones entre países democráticos; su fin de lograr alineamientos tecnológicos contra China, no cristaliza.

Ante la irrelevancia de la Cumbre de las Américas y el descrédito e ineficacia revelada por la OEA como interlocutor con la región, Estados Unidos se ve presionado a conducir un proceso de reformas que implicaría “sacrificar” a su secretario general.

Ámbito militar y de seguridad

Se profundiza la coordinación entre el Departamento de Estado, de Justicia, de Defensa, de Seguridad Interna, la Comunidad de Inteligencia y el Comando Sur, con incidencia en la agenda regional de seguridad y en el uso de las embajadas como instrumentos de injerencia. La USAID y la NED incrementan las acciones encubiertas y desestabilizadoras.

Estados Unidos fortalece instituciones interamericanas como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Junta Interamericana de Defensa (JID). La Comisión Interamericana de Defensa articula las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, Jefes de Ejércitos, Marina y Aviación, y de los subsistemas regionales de defensa existentes.

Se incrementa la presencia rotativa de efectivos en la región. Se refuerza el principio de defensa y seguridad compartidas y se amplían las facilidades ‘temporales’ con énfasis en los Centros de Operaciones de Emergencia. Aumenta la presencia de contratistas civiles y militares, el entrenamiento de fuerzas armadas y policiales y las operaciones antidroga, antiterroristas y en el ciberespacio.

Se refuerza el papel del Comando Sur como interlocutor y su participación directa en el enfrentamiento a pandemias y enfermedades, lo que facilita el control territorial. Extiende su rango de acción al ciberespacio a través de “guerras de información” que monitorean las redes sociales y regulan la libertad de expresión en Internet.

Estados Unidos fortalece los lazos de seguridad con Colombia y Brasil, como vía para ‘atar de manos’ a sus nuevos gobiernos y contrarrestar el avance chino en la región. Ambos países incrementan su relación con el Comando Sur. Aumenta la interacción con la OTAN en el hemisferio occidental.

Ante la presencia de rivales estratégicos, Estados Unidos adopta una postura más proactiva para asegurar el acceso a los recursos naturales estratégicos e infraestructura crítica de la región a través de entrenamientos, ejercicios militares, presencia de fuerzas navales y operaciones especiales vinculadas a las embajadas y a la Comunidad de Inteligencia.

Se redimensiona la importancia estratégica de la Cuenca del Caribe a partir de la percepción de amenaza en torno a la posibilidad de despliegue de fuerzas militares rusas en el área. El Caribe y Centroamérica continúan siendo las principales rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos.

Capacidades de articulación regional. Perspectivas de la CELAC

Los ajustes en la globalización confieren mayor peso a lo regional. La falta de cooperación oportuna de Estados Unidos durante la pandemia y la emergencia de una nueva ola de gobiernos que miran la región como

espacio estratégico para avanzar sus proyectos, recolocan la integración en el foco de la agenda. Sin embargo, salvo propuestas sectoriales factibles de una presentación despolitizada, no existe una concepción integral clara de una integración viable que logre articular el consenso de gobiernos y sociedades en la región. La ausencia de esa perspectiva regional sobre la relación con el mundo, hace a la región vulnerable al juego geopolítico entre potencias.

Se produce una relativa recuperación de la CELAC, cuyo dinamismo depende en gran medida del papel del país que asuma la Presidencia Pro Témpore (PPT), de su capacidad para manejar las diferencias y de la importancia estratégica que le otorguen sus miembros. Se incorporan a la agenda temas de carácter técnico y otros donde existen posibilidades de alcanzar consensos sin atizar fricciones políticas: cambio climático, salud, cooperación espacial, prevención y gestión de desastres, gestión de deuda, entre otros.

CELAC incentiva el restablecimiento pleno de las relaciones con Venezuela. Las posiciones en relación con Nicaragua, Venezuela y Cuba en temas relativos a los derechos humanos, la democracia y posiciones en el ámbito internacional, ocasionalmente provocan tensiones entre los miembros —incluso entre los de la nueva ola del progresismo.

El Foro CELAC-China continúa siendo el espacio de mayor interés estratégico para los miembros. Se recupera la interlocución con la Unión Europea y se exploran instancias de diálogo con otros países emergentes como la India.

Brasil se reincorpora plenamente a CELAC e incluso en un futuro próximo podría aspirar a la PPT como vía para recuperar su

liderazgo regional. Un gobierno de Lula intenta recuperar parcialmente algunas instancias institucionales de UNASUR, aprovechando irregularidades legales en el proceso de desafiliación. En tal escenario, quedaría abierto el viejo debate sobre la incorporación de miembros no sudamericanos, en especial de México.

Actores extrarregionales en América Latina y el Caribe: la disputa estratégica

Unión Europea

La guerra en Ucrania impulsa a la Unión Europea a asegurarse aliados a través de la revitalización de acuerdos comerciales estancados, pendientes de ratificación, entre ellos, con MERCOSUR, Chile y México, aunque persiste el proteccionismo europeo como un obstáculo a la ratificación del acuerdo.

La Unión Europea acompaña a Estados Unidos como aliado en su propósito de contener la presencia china en América Latina, a lo que se suma su interés de que los latinoamericanos y caribeños apliquen sanciones a Rusia, cuestión que la mayor parte no considera conveniente. En apoyo a Estados Unidos, la Unión Europea otorga especial atención a los países de Centroamérica y Caribe, y refuerza su participación en el BID.

China

La participación china en el mercado 5G, sus propuestas de infraestructura portuaria y aeroportuaria (especialmente en Centroamérica y Caribe), las estaciones de observación espacial, las centrales nucleares y el proyecto de base logística en la órbita de la Antártida desatan las presiones de Estados Unidos utilizando la diplomacia, la

renegociación de la deuda, la amenaza de reducción de financiamiento y cooperación en seguridad y gestión de desastres, etc. Se incrementan las visitas del Comando Sur y sus acusaciones sobre las amenazas a la seguridad asociadas a la presencia china.

Los países de la región —incluso los gobernados por la derecha— esquivan los intentos de Estados Unidos de inducir un alineamiento al estilo de la Guerra Fría; se acogen a fórmulas de equidistancia para decidir la participación de las empresas chinas en la actualización tecnológica, de manera que les permita sacar alguna ventaja de la competencia entre ambas potencias. El tema suscita debates y divisiones entre actores políticos y dentro de la sociedad en general.

Los pasos de Argentina hacia los circuitos institucionalizados de la llamada “globalización con características chinas” (entrada al BRI y aceptación como miembro del BRICS), son percibidos por Estados Unidos como un riesgo para su liderazgo e intenta compensarlo atrayéndola a foros multilaterales de la órbita occidental. La creciente relación con China y su posición cercana a la Antártida pone a ese país en el foco del Comando Sur.

Brasil, por su parte, no parece tomar el mismo camino, incluso con un gobierno liderado por Lula: los intereses económicos como los representados en la Confederación Nacional de Industrias consideran que el actual status de las relaciones con China es ventajoso.

Estados Unidos promueve las relaciones con Taiwán, presiona a los países a que demanden su inclusión en foros de Naciones Unidas, y estimula a aquellos que no tienen relaciones con Taiwán le den un tratamiento cuasi oficial.

Estados Unidos convoca a sus aliados extrarregionales para compartir los costos de la competencia creando asociaciones en tecnología e infraestructura para ofrecer alternativas a las iniciativas chinas en la región, pero no equiparan los recursos de sus proyectos con los del país asiático.

Los medios occidentales utilizan la tendencia a la reducción de los créditos chinos para crear desconfianza sobre la sostenibilidad de sus recursos, más focalizados en las inversiones. Occidente intenta condicionar el otorgamiento de préstamos y la renegociación de deudas a la restricción de las relaciones con China.

La fragmentación generada por la competencia estratégica no es un alineamiento a la órbita no occidental, no responde a una afiliación política en el marco de la rivalidad estratégica sino a intereses económicos. Algunos países intentan compensar su "osadía" con posiciones neutrales o críticas fren-

te a otros actores en temas como derechos humanos, democracia, libertades civiles, etcétera.

Rusia

La percepción de que capacidades militares rusas tengan presencia en la región y puedan elevar las tensiones con Estados Unidos e incrementar los riesgos de seguridad, se convierte en un factor de contención.

Algunos Estados mantienen el interés en adquirir tecnología militar convencional de manufactura rusa, a pesar del cuestionamiento de Estados Unidos y sus aliados. La disputa del mercado militar latinoamericano es vista como incentivo para autorizar las exportaciones de equipos militares estadounidenses o europeos para renovar el material bélico obsoleto.

La región sigue siendo importante como mercado para las exportaciones rusas de vacunas, fertilizantes y la industria automotriz.